PLANEACIÓN ANÁLISIS

¿Billetera desbordada? Las dudas en la ejecución pública

Regalías y subsidios, dos temas en la mira de la Contraloría por el uso que se les ha dado a los recursos.



n menos de tres meses, la Contraloría General de la República le ha jalado las orejas dos veces al Gobierno por la manera como ha utilizado sus recursos para beneficiar a los colombianos.

La primera ocasión ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando el contralor, Edgardo Maya Villazón, informó que un 40 % de las obras que fueron financiadas con las regalías, entre 2015 y 2017 en todo el país, quedaron inconclusas, en abandono o terminadas pero que no se usan. Es decir, se convirtieron en elefantes blancos.

La segunda fue hace dos semanas atrás. El 5 de julio, el mismo funcionario aseguró que el gasto público en subsidios del Estado alcanzó en 2017 una cifra que equiparó la misma recaudación de impuestos de ese año.

En un avance de un estudio que aún no se ha terminado, Maya anticipó que en 2017 se destinaron 118,5 billones de pesos para sostener subsidios de distinto tipo. La cifra supera los 115,1 billones de recaudos de impuestos por actividad económica interna reportados por la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian.

"Existen fallas no solo en la misma ejecución sino desde los mecanismos diseñados para entregar los subsidios, el control que deben ejercer los responsables de ejecutar los diferentes programas y ordenadores del gasto cuestionados por corrupción", le aseguró el contralor a EL COLOM-BIANO (Ver entrevista).

Aunque el Departamento

Aunque el Departamento Nacional de Planeación, DNP, protestó porque sus cuentas del gasto en subsidios suman 72 billones de pesos, sigue siendo un monto considerablemente alto, que llega a un 9 % del Producto Interno Bruto, PIB, del país.

Al margen de la discusión sobre cómo se hicieron las cuentas, en el aire queda la duda de si la billetera del Estado ha ayudado a que en todo el país se cubran los propósitos sociales a un costo razonable y se mejore la distribución del ingreso para generar equidad.

Más aún porque la ausencia del Estado ha sido un factor que han destacado organizaciones sociales a la hora de explicar fenómenos de pobreza y violencia en sectores en donde había dominado las Farc antes de la firma del Acuerdo de paz. La crisis social denunciada constantemente en el Catatumbo y Chocó son solo dos ejemplos de ello.

Tan solo la semana pasada, organizaciones sociales como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, y las Diócesis de Apartadó, Istmina-Tadó y Quibdó denunciaron que la falta de institucionalidad en el departamento ha dejado a la comunidad a merced de la guerrilla del Eln y las bandas criminales.

Vale anotar que la entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) le exigirá que la inversión que realice ayude a la sociedad a superar sus problemas y no solo a sobrellevarlos.

¿Cómo estamos?

Según información provista por el DNP, los 72 billones de pesos se destinan a un total de 62 programas dispersos en todo el Gobierno. Algunos de los más conocidos son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Desde 2010, con la llegada de Juan Manuel Santos, el monto de los subsidios que se entregan en el país se ha incrementado en un 45% y según el DNP, la educación y las pensiones son los ítems en los que más se invirtió.

Sin embargo, los indicadores en cuanto a la reducción de la brecha social y la desigualdad muestran que existe un 26,9% de la población considerada pobre, 7,4% está catalogada en pobreza extrema y hay 65% de la población rural que vive en condiciones de pobreza, según el Dane.

Aparte, un informe publicado este año por el Centro Latinoamericano para el Desa-



LA DEFENSA DEL DNP A LA EJECUCIÓN

Frente al tema de subsidios y regalías, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, defendió que el sistema ha repartido de mejor forma los recursos: "Antes el 80 % de los recursos iban a nueve departamentos productores y ahora van dirigidos a todo el territorio nacional".

Frente a los subsidios, hizo autocrítica frente a programas "que están llegando a los estratos alto, como con las pensiones", sin embargo, resaltó las ampliaciones de programas sociales, como Colombia Mayor.

rrollo Rural reveló que Colombia es uno de los países con mayor brecha social entre regiones, solo superado por México y Guatemala. Eso quiere decir que existen una distancia cada vez mayor de bienestar entre departamentos prósperos (Antioquia) y otros con debilidades (La Guajira).

Para Gilberto Toro, director

Para Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, "la persistencia de disparidades regionales en los servicios sociales básicos da cuenta de serios problemas en la efectividad que ha tenido el gasto que subsidia el régimen de salud, por ejemplo, o el acceso al agua potable, por señalar dos competencias típicamente municipales".

Para Toro, el problema reside en que estos subsidios han sido diseñados "homogéneamente" desde Bogotá, y por tanto "sin considerar diferencias geográficas. El próximo Go-